



PODER JUDICIAL
H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE MORELOS

TOCA ORAL: 51/2022-CO-7
CAUSA PENAL: JOC/074/2021

UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA, GRATUITA Y HONESTA ES DIGNA DE ASPIRACIÓN
SOCIAL; USTED PUEDE Y DEBE COLABORAR

- - - **CERTIFICACIÓN.** Que el plazo de **DIEZ DÍAS** previsto por el **párrafo segundo** del artículo **471** del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que las partes legitimadas interpongan el recurso de apelación correspondiente, comprendió del **nueve al veintitrés, ambos del mes de marzo del dos mil veintidós**, en razón de que los días doce, trece, diecinueve y veinte del mismo mes de marzo del año en curso fueron sábado y domingo respectivamente y el día veintiuno de marzo del año que transcurre fue inhábil. - - - - -

En la Heroica e Histórica Ciudad de Cuautla, Morelos, a veinticinco de abril de dos mil veintidós.

Por recibido el Toca Penal **51/2022-CO-7** en la Oficialía de Partes de esta Sala del Tercer Circuito Judicial **el día trece de abril del años dos mil veintidós a las catorce horas con cuarenta y dos minutos**, al que se anexa el oficio número 01660/22, que suscribe la Licenciada *********, Jueza de Primera Instancia Especializado en Tribunal de Enjuiciamiento del Único Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con sede en Cuautla, Morelos, mediante el cual remite dos juegos de copias simples y dos juegos de copias certificadas constante de ciento setenta y ocho fojas, de la carpeta administrativa JOC/74/2021, instruida en contra de ********* y/o *********, por la comisión del delito **CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE POSESIÓN SIMPLE DEL ESTUPEFACIENTE CONOCIDO COMO MARIHUANA**, cometido en agravio de la **SOCIEDAD**; al que acompaña un escrito en original de apelación y se anexan sus respectivos agravios, constantes de ocho (08) páginas útiles tamaño oficio, escrito por una sola de sus caras, presentado por el agente del ministerio público, M. en D. *********, registrado por la oficialía de partes del Tribunal de Control con número de cuenta **001411**; y por cuadruplicado un disco de video digital que contiene la videograbación de la audiencia en la que recae la resolución combatida, para el efecto de substanciar el **RECURSO DE APELACIÓN** interpuesto por **el agente del ministerio público** antes aludido, en contra de la **sentencia absolutoria y sentencia absolutoria por mayoría, dictada en fecha veintidós de febrero del dos mil veintes** dictada por el Tribunal de Enjuiciamiento.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, fórmese y regístrese el toca penal en el Libro de Gobierno respectivo, bajo el número que por su orden le corresponde **51/2022-CO-7** y pasen los autos al Magistrado **RAFAEL BRITO MIRANDA**, a quien por turno le corresponde conocer del presente asunto.

Ahora bien, haciendo un análisis minucioso de las constancias que conforman el toca antes citado, de autos se desprende que el agente del ministerio público antes citado, de acuerdo a su escrito de interposición del recurso de apelación está recurriendo la determinación adoptada por el Tribunal de Enjuiciamiento en fecha **veintidós de febrero de dos mil veintidós**, consistente en el **fallo absolutorio por mayoría** a favor de ******* y/o *******, por los delitos de **homicidio en grado de tentativa y delito cometido por conductores de vehículo automotor** y el **fallo condenatorio por mayoría** en contra del **sentenciado** antes referido, por el delito **contra la salud en su modalidad de posesión simple del estupefaciente conocido como marihuana**.

Inconforme con tal determinación y ante el Tribunal de Enjuiciamiento, el Representante Social ya referido, hizo valer el recurso de apelación expresando los agravios que considera irroga la resolución de mérito.

Por lo que en términos del numeral **461** del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Alzada procede a **resolver de plano** sobre la admisión del mismo y se procede a analizar la **idoneidad, oportunidad y legitimidad en el recurso**; se advierte que el recurrente interpone recurso de apelación en contra de la determinación adoptada por el Tribunal de Enjuiciamiento en fecha **veintidós de febrero de dos mil veintidós**. Por lo que cabe precisar que el recurrente cuenta con legitimación para hacerlo, y que el recurso fue interpuesto en fecha **uno de marzo del dos mil veintidós** a las **doce horas con ocho minutos**, sin que hasta este momento se verifique si dicho recurso fue interpuesto en tiempo y forma acorde al **segundo párrafo** numeral **471** del invocado ordenamiento legal, por las consideraciones que más adelante tocaremos y con respecto a la vía de impugnación elegida por el quejoso; no pasa desapercibido para esta Alzada que el medio de



PODER JUDICIAL
H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE MORELOS

impugnación propuesto lo fue el **RECURSO DE APELACIÓN** en contra de la determinación por el Tribunal de Enjuiciamiento como ya se dijo.

En tales circunstancias este Cuerpo Colegiado considera que el recurso interpuesto resulta **inadmisible**, al no estar dentro de los preceptos legales a los cuales hace alusión el artículo **468** y **470** del Código Nacional De Procedimientos Penales:

Artículo 468. Resoluciones del Tribunal de enjuiciamiento apelables

Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Tribunal de enjuiciamiento:

I. Las que versen sobre el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público;

II. La sentencia definitiva en relación a aquellas consideraciones contenidas en la misma, distintas a la valoración de la prueba siempre y cuando no comprometan el principio de inmediación, o bien aquellos actos que impliquen una violación grave del debido proceso.

Artículo 470. Inadmisibilidad del recurso. El Tribunal de alzada declarará inadmisibile el recurso cuando:

I. Haya sido interpuesto fuera del plazo;

II. Se deduzca en contra de resolución que no sea impugnabile por medio de apelación;

III. Lo interponga persona no legitimada para ello, o

IV. El escrito de interposición carezca de fundamentos de agravio o de peticiones concretas.

Como se advierte, lo aducido por el recurrente no se encuentra previsto dentro de las hipótesis contempladas en el artículo antes referido, en razón de no estar frente a una sentencia definitiva, por lo que este Tribunal se encuentra impedido para entrar a su estudio, así como al estudio de las diversas manifestaciones que señala en sus agravios, aspectos que como ya se puntualizó no se encuentra estipulado dentro de las hipótesis apelables. Sin pasar por desapercibido, que de autos se desprende que en fecha veintidós de febrero del presente año al momento de dictar el fallo correspondiente, **el Tribunal de Enjuiciamiento, señaló las catorce horas del uno de marzo del año que transcurre**, para que tuviera verificativo la audiencia de individualización de sanciones y la **explicación de sentencia**

UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA, GRATUITA Y HONESTA ES DIGNA DE ASPIRACIÓN SOCIAL; USTED PUEDE Y DEBE COLABORAR

absolutoria, y el agente del ministerio público interpuso el recurso de apelación en fecha **uno de marzo del dos mil veintidós** a las **doce horas con ocho minutos**; por tanto, siendo un Órgano técnico el Representante Social y desde luego un perito en la materia, no se puede sanear su actuar y no obstante de que el recurrente apeló el fallo dictado en fecha veintidós de febrero del presente año, esta Alzada esta imposibilitada para entrar al estudio del mismo, ya que la resolución que puede ser objeto de apelación en segunda instancia es la redactada por escrito por el Tribunal de Enjuiciamiento, ya que técnicamente es a la única que el legislador denomina como "sentencia" y desde luego el agente del ministerio público, basa sus agravios en las consideraciones que tomo el Tribunal de Enjuiciamiento para el dictado del fallo correspondiente, no obstante, éstas, por sí mismas ni en conjunto, constituyen el acto jurídico denominado sentencia, sino hasta su incorporación a la resolución escrita, por lo que en estricto sentido sólo aportan información que es parte de esta última. Tal conclusión se robustece si se considera que el Tribunal de Enjuiciamiento, al dictar el fallo, únicamente se encuentra obligado a dar una relación "sucinta", esto es, concisa, breve o escueta de los fundamentos y motivos que lo sustentan; lo cual, desde luego, impide un conocimiento pleno a las partes del contenido del acto decisorio. En ese sentido, el término de diez días que la ley concede a las partes para interponer el recurso de apelación contra la sentencia definitiva, sólo puede empezar a computarse cuando éstas ya tienen conocimiento pleno de los fundamentos y motivaciones que rigen el acto decisorio, lo que en la especie no aconteció así, ello en virtud de que, como ya se dijo, el Representante Social tanta veces referido, interpuso su recurso de apelación previo al dictado de la sentencia, sin tener el conocimiento pleno de los fundamentos y motivaciones de los cuales derivó la sentencia absolutoria. Lo que se robustece con el siguiente criterio:

Registro digital: 2021933

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Décima Época

Materias(s): Penal

Tesis: I.8o.P.34 P (10a.)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 77, Agosto de 2020, Tomo VI, página 6242

Tipo: Aislada



PODER JUDICIAL
H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE MORELOS

UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA, GRATUITA Y HONESTA ES DIGNA DE ASPIRACIÓN
SOCIAL; USTED PUEDE Y DEBE COLABORAR

SENTENCIA DEFINITIVA. LA QUE ES OBJETO DE APELACIÓN ANTE EL TRIBUNAL DE ALZADA, ES EL DOCUMENTO ESCRITO MATERIA DE LA AUDIENCIA DE LECTURA Y EXPLICACIÓN DE SENTENCIA.

De una interpretación sistemática de los artículos 67, 70, 397, 401, 403, 404, 405, 409, 411, 456, 468 y 471 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se obtiene que la resolución que puede ser objeto de apelación en segunda instancia es la redactada por escrito por el tribunal de enjuiciamiento, ya que técnicamente es a la única que el legislador denomina como "sentencia" y que, por imperativo legal, debe ser leída y explicada en audiencia formal. Es cierto que las resoluciones con base en las cuales el tribunal de enjuiciamiento resuelve, de forma oral, la controversia sometida a su conocimiento, son el fallo y la determinación de imposición de sanciones y reparación del daño; no obstante, éstas, por sí mismas ni en conjunto, constituyen el acto jurídico denominado sentencia sino hasta su incorporación a la resolución escrita, por lo que en estricto sentido sólo aportan información que es parte de esta última. Tal conclusión se robustece si se considera que el tribunal de enjuiciamiento, al dictar el fallo, únicamente se encuentra obligado a dar una relación "sucinta", esto es, concisa, breve o escueta de los fundamentos y motivos que lo sustentan; situación que también prevalece, por similitud jurídica, al momento de emitir la diversa determinación de imposición de sanciones y reparación del daño, lo cual, desde luego, impide un conocimiento pleno a las partes del contenido del acto decisorio. Dicha situación no se presenta tratándose de la sentencia, toda vez que por disposición legal, las resoluciones escritas deben contener los preceptos que las fundamentan, además, porque acorde con los numerales 403, 405 y 406 de la citada codificación, el tribunal de enjuiciamiento tiene la obligación de abordar diversos tópicos y motivarlos según se trate de sentencia condenatoria o absolutoria, todo ello a fin de dar mayor certeza y seguridad jurídica a las partes, a efecto de que tengan la posibilidad de defenderse con la interposición del recurso de apelación correspondiente. En ese sentido, el término de diez días que la ley concede a las partes para interponer el recurso de apelación contra la sentencia definitiva, sólo puede empezar a computarse cuando éstas ya tienen conocimiento pleno de los fundamentos y motivaciones que rigen el acto decisorio, lo cual únicamente sucede con la resolución escrita que, por disposición legal, produce sus efectos en la audiencia a que se refiere el último párrafo del artículo 401 del código procesal de la materia.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 192/2019. 30 de enero de 2020.
Unanimidad de votos. Ponente: Taissia Cruz Parceró.
Secretario: César Salvador Luna Zacarías.

Nota: Por ejecutoria del 12 de enero de 2022, la Primera Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 219/2021, derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis.

Esta tesis se publicó el viernes 07 de agosto de 2020 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

En virtud de lo anterior, resulta ocioso entrar al estudio de los motivos de inconformidad, dado que la resolución por la cual se duele el recurrente, no se encuentra prevista en las hipótesis establecidas en el artículo **468** de la Ley Adjetiva.

Lo anterior se considera así, toda vez que, la apelación es un recurso cuyos supuestos de procedencia son **específicos**, lo que de antemano repudia toda noción de integración por analogía de sus supuestos de procedencia. Por tanto, si la normativa penal no prevé expresamente la interposición del recurso de apelación para impugnar la determinación tomada por el Tribunal el veintidós de febrero del dos mil veintidós, no debe hacerse procedente, a fin de no desnaturalizarlo, lo que hace que el medio de impugnación que nos ocupa sea improcedente.

Sin que lo anterior implique una violación a los derechos fundamentales del recurrente, pues resulta necesario que esta Sala verifique los supuestos establecidos en la Ley que permitan el inicio de un proceso o recurso, como es el hecho de que el recurso planteado **sea el medio de impugnación idóneo** para combatir la resolución materia de la alzada, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, pues estimar lo contrario significaría modificar el régimen establecido respecto de la procedencia del mencionado medio de impugnación, declarando procedente lo improcedente lo que implicaría atentar contra la seguridad jurídica.

En tal contexto tiene aplicación al caso, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes:



PODER JUDICIAL
H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE MORELOS

UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA, GRATUITA Y HONESTA ES DIGNA DE ASPIRACIÓN
SOCIAL; USTED PUEDE Y DEBE COLABORAR

“PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA.¹ Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente.

Y al no existir vulneración a derechos en la determinación y resultar **improcedente** el medio de impugnación interpuesto, por no encontrarse previsto en las hipótesis correspondientes sujetas de apelación se **desecha el recurso planteado**, en términos de los artículos 468, 470 y 475 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Comuníquese esta resolución al Tribunal de Enjuiciamiento para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar, remitiéndole copia certificada del presente acuerdo.

En su oportunidad archívese el presente toca como asunto totalmente concluido.

Lo que se ordena notificar a las partes técnicas y procesales en los domicilios y/o medios especiales de notificación proporcionados y autorizados para tales efectos.

Por último, túrnese las constancias al Notificador de la Sala, para que realice las notificaciones correspondientes; lo anterior de

conformidad con los artículos 40, 82, 83, 84, 85, 86 y 87 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES.

A s í lo acuerdan y firman los Magistrados de la Sala del Tercer Circuito del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, Maestro en Derecho **RAFAEL BRITO MIRANDA** Presidente y Ponente, Maestra en Derecho **MARTA SÁNCHEZ OSORIO**, Integrante y Maestro en Derecho **JAIME CASTERA MORENO**, Integrante. **Conste.-**